

Bogotá Julio 11 de 2025

Dr:

ASDRÚBAL CORREDOR VILLATE

**JUEZ TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN TERCERA**

E. S. D.

RADICADO: [11001333603820240014300](#) - índice 17 (llamamiento en garantía)

DEMANDANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P - ETB

DEMANDADO: Instituto de Desarrollo Urbano y otros

LLAMADO EN GARANTÍA por parte del IDU: MAB Ingeniería de Valor S.A.

CATHERINE ALZATE GALLO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 65.633.594 de Ibagué, Tarjeta Profesional No 168474 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder conferido por el Representante Legal de la sociedad MAB Ingeniería de Valor S.A., cuya personería respetuosamente solicito sea reconocida, estando dentro del término legal conferido, procedo a dar **contestación de la DEMANDA interpuesta por ETB contra el IDU y otros y del LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** interpuesto por el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU**, lo cual hago en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÓN

El auto admisorio del llamamiento en garantía fue enviado por parte del Despacho al correo electrónico de la empresa MAB Ingeniería de Valor S.A, el día 18 de junio de 2025. En dicho auto se nos concedió el término de 15 días para contestar el llamamiento en garantía de conformidad al artículo 225 del CPACA. Sin embargo, conforme a lo preceptuado en el artículo 199 del CPACA, la notificación por correo electrónico se entiende surtida 2 días después del recibo del correo electrónico y los términos empiezan a correr al día siguiente, con el envío del auto que admite la demanda, así que contamos los términos desde el 24 de junio de 2025, día en que empiezan a correr los términos, el cual finalizaría el día 15 de julio de 2024.

Se subdividirá el documento en dos capítulos, el primero de ellos para responder la demanda y el segundo para responder el llamamiento en garantía.

CAPITULO I – CONTESTACIÓN DEMANDA

Seguidamente, me pronunciaré en torno a los hechos de la demanda en la forma y orden previstos en el acápite correspondiente.



1. RESPUESTA A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

1. Entre el IDU y el Consorcio Vial IDU integrado por las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA, se celebró el Contrato de Obra N° 1279 de 2020, cuyo objeto es el siguiente:

CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.

RESPUESTA: Es cierto, es lo estipulado contractualmente.

2. La localización del Contrato de Obra N°. 1279 de 2020, según la cláusula 2° alcance del objeto, es la siguiente:

Así mismo, deberá realizar la construcción de las aceras y ciclorruta de la calle 92 y 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias, en Bogotá, D.C. Se precisa que la descripción técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista y en general la información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del presente contrato.

RESPUESTA: Es cierto, es lo estipulado contractualmente.

“3. El Contrato de Obra N°. 1279 de 2020 estableció el numeral 14.3.6 como obligación, entre otras, del contratista lo siguiente:

6. Informar al INTERVENTOR sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los 3 días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean imputable”s

RESPUESTA: Es cierto, es lo señalado contractualmente.

4. Desde el 29 de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecución del Contrato de Obra No. 1279 de 2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial integrado por las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA, se identificaron los siguientes daños causados a la infraestructura de red de propiedad de ETB:



- 4.1. El 29 de julio de 2022 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13144 ubicado en la Calle 92 # 16-30 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 12154 del 14 de octubre de 2022 la cual ascendió a \$480.156,18.
- 4.2. El 20 de septiembre de 2022 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13004 ubicado en la Calle 92 # 16-30 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 12166 del 22 de octubre de 2022 la cual ascendió a \$25.951.885,76.
- 4.3. El 05 de octubre de 2022 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13175 ubicado en la Calle 92 #16-30 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 13019 del 05 de octubre de 2022 la cual ascendió a \$1.342.054,96.
- 4.4. El 02 de noviembre de 2022 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13076 ubicado en la Calle 94 # 15-38 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 13002 del 02 de noviembre de 2022 la cual ascendió a \$8.617.223,61.
- 4.5. El 16 de diciembre de 2022 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13146 ubicado en la Calle 92 #16 30 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 13146 del 21 de junio de 2023 la cual ascendió a \$24.004.017,97.
- 4.6. El 07 de febrero de 2023 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13128 ubicado en la Calle 94 por carrera 13 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 13078 del 07 de febrero de 2023 la cual ascendió a \$82.887.516,89.
- 4.7. El 24 de mayo de 2023 personal de ETB identificó el daño del cable N° 13128 ubicado en la Calle 94 por carrera 13 de Bogotá y procedió a la reparación identificándola como Valoración 14012 del 21 de junio de 2023 la cual ascendió a \$57.709.365,22.

RESPUESTA: Es cierto, la identificación de daños corresponde a los señalados en los numerales 4.1 a 4.7., sin embargo, estos fueron reportados por ETB al IDU y a su vez el Instituto los reportó a la Interventoría, situación que el demandante debe probar en el proceso.

5. Las anteriores valoraciones están debidamente soportadas en los documentos denominados “Acta de reconocimiento de daños a la infraestructura de red ETB”, “Informe de Mantenimiento”, “Costos Incurridos por ETB en la reparación de Daños” y “Registros Fotográficos”.

La relación de valoraciones es la siguiente:



No.	Número de valoración	Fecha del daño	Valor de la reparación	Fecha de la valoración	Ubicación	OTM	Distrito	Elemento afectado
1	12154	29/07/2022	\$ 480.156,18	14/10/2022	Calle 92 No. 16 30	95227 8	13144	cable
2	12166	20/09/2022	\$ 25.951.885,76	22/10/2022	Calle 92 No. 16 30	95511 5	13004	cable
3	13002	2/11/2022	\$ 8.617.223,61	17/01/2023	Calle 94 No. 15 38	95752 2	13076	cable
4	13019	5/10/2022	\$ 1.342.054,96	27/01/2023	Calle 92 No. 16 30	95604 3	13175	cable
5	13078	7/02/2023	\$ 82.887.516,89	21/02/2023	Calle 94 por Carrera 13	96217 6	13128	cable
6	14012	24/05/2023	\$ 57.709.365,22	21/06/2023	Calle 94 por Carrera 13	97077 8	13128	cable
7	13146	16/12/2022	\$ 24.004.017,97	8/03/2023	Calle 92 No. 16 30	96007 4	13175	cable

RESPUESTA: Es parcialmente cierto, la información de valoración de daños corresponde a la del acta de reconocimiento de daños a la infraestructura de red ETB, sin embargo, se deja las siguientes precisiones:

- Si bien los valores del cuadro corresponden a las informadas, se presenta diferencia en la discriminación de los costos.
- La sola relación de costos por ETB no son suficientes, deben ser probados en el proceso, ya que al revisar las valoraciones del cuadro del hecho 5, no se evidencia como prueba las valoraciones No 5 (13078) y 7 (13146) de la relación.
- Las valoraciones de los daños fueron presentadas por ETB en formatos que no están debidamente diligenciados ni suscritos por la Interventoría o el Contratista de Obra.

Así las cosas, teniendo en cuenta la información conocida por la Interventoría, los conceptos anteriormente relacionados, son parcialmente ciertos, ya que si bien, la suma de los conceptos presentados en este hecho y los conceptos que fueron objeto de requerimientos directos al Contratista copiados a la Interventoría, dan lo mismo; la discriminación de los costos es diferente, como se muestra a continuación:



Oficio ETB	Fecha de los daños	Lugar del daño	Valoración de daños	Comunicación de traslado al Contratista	Asunto
2023-0016-ECC-EIGC	29/07/2022 20/09/2022 02/11/2022	Calle 92 frente al No 16-30 Calle 94 frente al No 15-38	\$ 35,049,265.55	MAB-2-1504-0165-23 del 1° de febrero de 2023 con radicado 20235260365132	Traslado del oficio STESV 20233360130201 del 30 de enero del 2023 Remisión comunicado 2023- 0016-ECC-EIGC, con radicado IDU 20235260128012 del 27/01/2023 – Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB
2023-0194-ECC-EIGC	5/10/2022	Calle 92 frente al No 16-30	\$ 1,342,055.00	MAB-2-1504-0287-23 del 21 de febrero del 2023 con radicado 20235260365132	Traslado del oficio 2023-0194-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB
2023-0237- ECC-EIGC	7/02/2023	Calle 94 entre carrera 13 y 15 costado sur	\$ 57,709,365.22	MAB-2-1504-0367-23 del 6 de marzo del 2023 con radicado 20235260518302	Remisión oficio 2023-0237- ECC-EIGC, Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB.
2023-0411-ECCEIGC	5/10/2022	Calle 92 frente al No 16-30	\$ 24,004,017.97	MAB-2-1504-0410-23 del 10 de marzo del 2023 con radicado 20235260518302 MAB-2-1504-0735-23 del 16 de mayo del 2023 con radicado 20235260877322 MAB-2-1504-0813-23 del 6 de junio del 2023 con radicado 202352601081132	GTC. Contrato de Obra 1279 de 2020. Traslado del oficio STESV 20233360315621 del 6 de marzo del 2023 Remisión de valoración de daños sobre infraestructura ETB Traslado del oficio 2023-0411-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB Respuesta a su oficio OBR.90-1279-OFC-2720 calendarado el 25 de mayo del 2023. Solicitud formal para la consolidación y programación de una mesa de trabajo de índole jurídico daños infraestructura ETB.
2023-0936-ECCEIGC	24/05/2023	Calle 94 entre carrera 13 y 15	\$ 82,887,517.00	MAB-2-1504-0989-23 del 4 de julio del 2023 con radicado 202352601365332	Traslado del oficio 2023-0936-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB
2023- 1532-ECC-EIGC	N.A.	N.A.	N.A.	MAB-2-1504-1306-23 del 10 de octubre del 2023 con radicado 202352601815542	GTC. Contrato de obra IDU 1279 de 2020. Traslado oficio 2023- 1532-ECC-EIGC. Solicitud entrega de soportes de pago de daños en la infraestructura de ETB para el trámite de Paz y Salvo de la ESP ETB.

- Es importante mencionar que los oficios remitidos por ETB llegaron en copia al Interventor que, a su vez, fueron trasladados al Contratista con las siguientes comunicaciones:
- MAB-2-1504-0165-23 del 1° de febrero de 2023 con radicado 20235260365132 de asunto: Traslado del oficio STESV 20233360130201 del 30 de enero del 2023 Remisión comunicado 2023- 0016-ECC-EIGC, con radicado IDU 20235260128012 del 27/01/2023 – Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0287-23 del 21 de febrero de 2023 con radicado 20235260365132 de asunto: Traslado del oficio 2023-0194-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0367-23 del 6 de marzo de 2023 con radicado 20235260518302 de asunto: Remisión oficio 2023-0237- ECC-EIGC, Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0410-23 del 10 de marzo de 2023 con radicado 20235260518302 de asunto: GTC. Contrato de Obra 1279 de 2020. Traslado del oficio STESV 20233360315621 del 6 de marzo del 2023 Remisión de valoración de daños sobre infraestructura ETB.
- MAB-2-1504-0735-23 del 16 de mayo de 2023 con radicado 20235260877322 de asunto Traslado del oficio 2023-0411-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0813-23 del 6 de junio de 2023 con radicado 202352601081132 de asunto: Respuesta a su oficio OBR.90-1279-OFC-2720 calendarado el 25 de mayo de 2023. Solicitud formal para la consolidación y programación de una mesa de trabajo de índole jurídico daños infraestructura ETB.
- MAB-2-1504-0989-23 del 4 de julio de 2023 con radicado 202352601365332 de asunto: Traslado del oficio 2023-0936-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.”
- MAB-2-1504-1306-23 del 10 de octubre de 2023 con radicado 202352601815542 de asunto: GTC. Contrato de obra IDU 1279 de 2020. Traslado oficio 2023- 1532-



ECC-EIGC. Solicitud entrega de soportes de pago de daños en la infraestructura de ETB para el trámite de Paz y Salvo de la ESP ETB.

6. ETB S.A. E.S.P. procedió a la reparación de los daños, consistente en la reparación de las afectaciones, labores de mantenimiento de la red y utilización de materiales que se detallan en cada una de las valoraciones, específicamente en los documentos denominados “Costos Incurridos por ETB en la reparación de Daños” elaboradas por la Vicepresidencia de Infraestructura de ETB, por un total de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$200.992.220,59).

RESPUESTA: Es parcialmente cierto. ETB S.A. E.S.P. aparentemente procedió a la reparación de los daños relacionados en el hecho 6, sin embargo, los costos en los que incurrió deben ser acordes a lo probado en el proceso.

7. Las reparaciones fueron debidamente comunicadas al Consorcio Vial y este a su vez dio respuesta, en los siguientes términos:

No.	Número de valoración	Oficio requiriendo pago de valoración	Respuesta Consorcio Vial IDU
1	12154	2023-0016-ECC-EIGC 25/01/2023	OBR.90-1279-ofc-2720 25/05/2023 Se solicita reconsideración debido a que se trata de hechos de terceros puestos en conocimiento de la FGN
2	12166		
3	13002		
4	13019	2023-0194-ECC-EIGC 25/01/2023	Sin respuesta
5	13078	2023-0237-ECC-EIGC 24/02/2023	
6	14012	2023-0936-ECC-EIGC 4/07/2023	
7	13146	2023-0411-ECC-EIGC 9/95/2023	OBR.90-1279-ofc-2713 sin fecha Se solicita reconsideración debido a que se trata de hechos de terceros puestos en conocimiento de la FGN

RESPUESTA: Es cierto. Las reparaciones fueron debidamente comunicadas al Consorcio Vial y este a su vez dio respuesta al IDU a través de los comunicados relacionados en el hecho, lo anterior por cuanto la interventoría fue copiada en las comunicaciones de respuesta relacionadas.



8. La demanda no relaciona un hecho 8. por lo tanto, se continúa con el hecho número 9.

9. *El Consorcio Vial mediante comunicación del 30 de mayo de 2023, trasladada a la Gerencia de Defensa Jurídica el 09 de junio de 2023, solicitó a ETB:*

Por lo anterior, y en vista de la necesidad de conocer la posición de la dirección de defensa jurídica a la cual fue trasladada el conocimiento de nuestra solicitud, requerimos que de existir material probatorio que desvirtué lo aquí expuesto, sea trasladado a nuestro conocimiento, para el respectivo ejercicio del derecho de contradicción y defensa del CONSORCIO VIAL IDU. Por ende, muy amablemente solicitamos se nos brinde una respuesta formal a nuestro requerimiento en los términos legales establecidos jurídicamente para ello, brindando una respuesta de fondo y a satisfacción de la misma.

RESPUESTA: Es cierto, el Consorcio Vial mediante comunicación del 30 de mayo de 2023, realizó la solicitud indicada en este hecho.

10. *Mediante comunicación del 5 de julio de 2023, dio respuesta señalando:*

“... La responsabilidad por los daños presentados en la infraestructura de red de ETB en los tramos donde se ejecuta el Contrato No. 1279 de 2020, está a cargo tanto, del Instituto de Desarrollo Urbano como de las personas que conforman el Consorcio Vial IDU, teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en el señalado contrato.

Ahora, en cuanto a la posición jurídica de la Compañía frente a estos hechos, me permito indicarle que, es un deber de ETB adelantar todas las actuaciones necesarias para la recuperación de los recursos invertidos en la reparación de las afectaciones presentadas, razón por la cual se adelantaron cobros directos al IDU y ante la falta de pago, se trasladó el caso a esta Gerencia quien es la encargada de iniciar la acción legal pertinente ante la autoridad judicial, siendo este el escenario donde se podrán debatir todas las posiciones jurídicas, entre ellas, la excepción de hecho de un tercero que su Entidad considera se configura.

Es importante señalar que, la documentación que se aporta a la acción judicial corresponde a: (i) los costos incurridos por ETB en la reparación del daño, (ii) el informe de daño, (iii) el certificado de propiedad de los bienes afectados, (iv) el registro fotográfico y (v) el acta de reconocimiento de daños, documentos que se le adjuntan a la presente comunicación.

En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud, quedando atentos a cualquier propuesta de pago que pueda realizarse.”

RESPUESTA: Es un hecho que no nos consta. debe ser probado en el proceso.

11. *Entre ETB y IDU se celebró el convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 cuyo objeto y alcance son:*



PRIMERA.- OBJETO: Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generen con ocasión de la ejecución de obras civiles y obras telemáticas y demás actividades necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, en Bogotá, D.C.

SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: Establecer reglas y procedimientos de cooperación y coordinación, de acuerdo con las competencias y funciones de cada parte, para el desarrollo y armonización de los proyectos de infraestructura de transporte del sistema de movilidad y espacio público a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y de la infraestructura de redes y activos de telecomunicaciones a cargo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, dentro de los principios constitucionales y legales.

Igualmente, se determina la metodología para el pago de las obligaciones a cargo de las partes.

PARÁGRAFO: Los proyectos de infraestructura de que trata el presente Convenio también incluyen las obras públicas a cargo del IDU en virtud de los Convenios Interadministrativos suscritos con la empresa Transmilenio S.A., con las Alcaldías Locales del Distrito Capital, de Contratos de Asociación Público Privada, y otros derivados de su competencia.

RESPUESTA: Es cierto, entre el IDU y la ETB se celebró el convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016, el cual reposa en los documentos anexos del proceso.

12. El convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 dispuso, entre otras cosas que:

NOVENA.- AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: El IDU a través de su Contratista deberá prever mecanismos para garantizar la preservación de la red y la infraestructura de propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de daño y hurto a que se ven expuestas por efecto de la ejecución de las obras dentro del límite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario.

Por su parte, durante las intervenciones que realice la ETB en la ejecución de las maniobras, tomará las máximas precauciones para no afectar la infraestructura. En caso de presentar algún tipo de daño, la ETB deberá garantizar la recuperación en iguales o mejores condiciones.

RESPUESTA: Es cierto, en dicho convenio se evidencia la cláusula novena la cual es clara en señalar y regular las afectaciones a la infraestructura de ETB.

13. El convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 remite a lo dispuesto en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura urbana, que se adjunta, y en la cual se resalta:



1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales que el IDU debe tener en cuenta para llevar a cabo las diferentes actividades con las ESP y TIC, para la protección, traslado o reubicación de redes por necesidad del proyecto de infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las diferentes etapas de un proyecto de infraestructura de transporte.

2 ALCANCE

Comprende las actividades generales que se deben tener en cuenta en las etapas de factibilidad, diseño y obra, para la protección, traslado o reubicación de redes y activos por necesidad del proyecto de transporte y requerimientos adicionales de prestadores de servicios públicos u operadores de redes, activos y servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones, en un proyecto de infraestructura de transporte.

RESPUESTA: Es cierto, el objetivo y alcance del convenio N°. 4600015905

14. A la fecha, pese a las obligaciones de las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA, conformantes del Consorcio Vial IDU, no se ha recibido pago alguno por concepto de reparación del daño cuantificado en los documentos de "Costos Incurridos por ETB en la reparación de Daños por un total de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$200.992.220,59).

RESPUESTA: Es cierto, es lo que ha venido manifestando ETB y a la fecha no tenemos conocimiento que este pago ya se haya reconocido.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones que serán esbozadas a lo largo del presente escrito. Adicionalmente, solicito al Despacho condenar en costas procesales y agencias en derecho al extremo demandante. Frente a las pretensiones de la demanda, nos permitimos pronunciarnos a cada una de ellas así:

PRIMERA: Que se declare patrimonial y extracontractualmente responsables de forma solidaria al IDU identificado con el NIT 899999081-6, a las sociedades INNOVACONST SAS identificada con el NIT 900154746-1, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS identificada con el NIT 806016855-4, INGESEM SAS identificada con el NIT 900159439-8 y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadanía N°. 79311841, por los daños y perjuicios de orden material sufridos por ETB S.A. E.S.P, desde el 20 de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, como consecuencia de la afectación a la infraestructura de su propiedad ubicada en el lugar de ejecución del Contrato Obra N°. 1279 de 2020.



RESPUESTA:

Es clara la pretensión frente a la solicitud de declaratoria de responsabilidad del IDU y del Contratista de Obra, ya que, frente a la primera pretensión de la demanda, esta interventoría —actuando como tercero llamado en garantía— se permite manifestar que no le asiste responsabilidad patrimonial ni extracontractual alguna por los daños reclamados por la parte demandante.

La interventoría, no actúa como parte contratante ni ejecutora directa de las obras, sino como ente técnico encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y de reportar a la entidad contratante —en este caso, el IDU— cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.

En tal sentido, la interventoría no ostenta facultades de dirección, ni de ejecución, ni de ordenación del gasto, ni mucho menos de disposición presupuestal, funciones que recaen exclusivamente sobre la entidad contratante. Por consiguiente, cualquier responsabilidad que derive de los daños alegados corresponde analizarse exclusivamente respecto de quienes intervinieron directamente en la ejecución material de la obra y de la entidad contratante que dirige, supervisa y autoriza la misma.

Además, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la normativa aplicable a la contratación estatal en Colombia, la interventoría no responde solidariamente por actos u omisiones de la administración ni del contratista, salvo que se demuestre una actuación culposa o dolosa atribuible directamente a la interventoría, situación que en el presente caso no se ha demostrado ni acreditado por el demandante.

En consecuencia, se solicita al despacho que se exima a esta interventoría de cualquier condena o declaratoria de responsabilidad, en tanto no se configuran los presupuestos jurídicos ni fácticos que sustenten la pretensión en su contra.

SEGUNDA: *Que, en consecuencia de la anterior declaración, se condene SOLIDARIAMENTE al IDU identificado con el NIT 899999081-6, a las sociedades INNOVACONST SAS identificada con el NIT 900154746-1, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS identificada con el NIT 806016855-4, INGESEM SAS identificada con el NIT 900159439-8 y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadanía N°. 79311841, al pago a favor de ETB S.A. E.S.P de la totalidad de los daños y perjuicios materiales causados los cuales corresponden a DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 200.992.220,59) que equivalen al daño emergente correspondiente a los costos asumidos por ETB S.A. E.S.P para la reparación de los daños, según los documentos denominados “Costos Incurridos por ETB en la reparación de Daños”, valoraciones N°. 12154-12166-13002-13019-13078-14012-13146, donde se discriminan los conceptos.*

RESPUESTA: En caso de que el despacho determine la existencia de responsabilidad a cargo de los directamente involucrados en la ejecución de la obra, esta parte no se opone



a que dicha condena recaiga exclusivamente sobre los responsables materiales y jurídicos, más no sobre esta interventoría, que carece de nexo causal alguno con el daño reclamado.

Por lo anterior, se solicita negar la condena solidaria frente a esta interventoría y se reitera que no le corresponde asumir ninguna de las sumas pretendidas por el demandante.

TERCERA: *Que se ordene que a las cantidades líquidas de dinero reconocidas se actualicen tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de ocurrencia del daño hasta la sentencia que ponga fin al proceso, conforme el artículo 187 del CPACA.*

RESPUESTA: De acuerdo en que caso de una condena se actualice las cifras conforme lo indican las normas respectivas, especialmente lo señalado en el artículo 187 del CPACA.

CUARTA: *Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 187 a 195 del CPACA.*

RESPUESTA: No nos oponemos frente a esta pretensión.

QUINTA: *Que se condene en costas y agencias del derecho a la parte demandada.*

RESPUESTA: No nos oponemos frente a esta pretensión.

3- EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS PARA LA DEMANDA:

A). AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. EN LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA DEMANDA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Una vez revisadas las pruebas y la contestación a la misma, es claro que obran suficientes pruebas en el proceso encaminadas a demostrar la ausencia de responsabilidad de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. en la ocurrencia de los hechos y los daños relatados en la demanda que nos ocupa.

Acorde con la contestación de la demanda aportada y la contestación del llamamiento en garantía por MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., se puede observar claramente que sus obligaciones fueron cumplidas a cabalidad, toda vez que, se ajustó a los requerimientos técnicos del contrato exigidos por la entidad contratante, realizando todas las gestiones a su alcance, las cuales se demuestran a través de los diferentes pronunciamientos y solicitudes que se adelantaron frente al contratista en cuanto al tema de los daños materiales de la Infraestructura de propiedad de ETB en los tramos de obra adelantados a través del contrato de Obra No 1279 de 2020 *desde el 20 de julio de 2022 y hasta el 24 de*

mayo de 2023 y máxime que contractualmente en el convenio celebrado entre el IDU y la ETB, señala sobre las afectaciones a la infraestructura de ETB, lo siguiente:

“NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: El IDU a través de su Contratista deberá prever mecanismos para garantizar la preservación de la red y la infraestructura de propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de daño y hurto a que se ven expuestas por efecto de la ejecución de las obras dentro del límite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario. Subrayado y negrita fuera de texto original. Negrita y subrayado fuera de texto original.

En donde claramente se determina que los costos asociados a las reparaciones acarreadas por los daños a la infraestructura de ETB serán pagados por el contratista.

Así mismo, al momento de estudiar la responsabilidad del estado, cuando se debate un daño especial, es necesario que la parte demandante acredite la existencia de los elementos esenciales para analizar la responsabilidad a cargo del estado:

“Conforme lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, patrimonial o moral, que el demandante no tenía por qué soportar; y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”, entendida esta como la “atribución de la respectiva lesión”

Ahora bien, la imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) “supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”

Tal y como lo ha establecido el Máximo Tribunal Administrativo y la doctrina. “En ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño. Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe, pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre.”

Asimismo, el Consejo de Estado en sentencia del pasado 1o de agosto de 20166, reiteró la posición antes adoptada por tal Órgano, así:

“El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, se torna imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

El daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad y, una vez verificada su existencia, se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada, como quiera que aquél es requisito indispensable de la obligación de reparar; así, la ocurrencia del daño y su antijuridicidad son presupuestos indispensable que generan el deber de reparar y, por tanto, corresponde al juez constatar su existencia, valorar si es o no antijurídico y, una vez estructurado, analizar la posibilidad de imputación o no a la entidad demandada.”

Concluyendo de lo anterior que, por no configurarse los elementos de la responsabilidad, NO es posible endilgar responsabilidad alguna con cargo a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. por los hechos señalados en la demanda, por las siguientes razones:

- a. La interventoría, en su calidad de auxiliar de la administración, no actúa como parte contratante ni ejecutora directa de las obras, sino como ente técnico encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y de reportar a la entidad contratante —en este caso, el IDU— cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.
- b. En tal sentido, la interventoría no ostenta facultades de dirección, ni de ejecución, ni de ordenación del gasto, ni mucho menos de disposición presupuestal, funciones que recaen exclusivamente sobre la entidad contratante. Por consiguiente, cualquier responsabilidad que derive de los daños alegados corresponde analizarse exclusivamente respecto de quienes intervinieron directamente en la ejecución material de la obra
- c. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la normativa aplicable a la contratación estatal en Colombia, la interventoría no responde solidariamente por actos u omisiones de la administración ni del contratista, salvo que se demuestre una actuación culposa o dolosa atribuible directamente a la interventoría, situación que en el presente caso no se ha demostrado ni acreditado por el demandante.
- d. No se observa dentro del expediente ningún llamado de atención de la interventoría del contrato ni de la entidad contratante por los hechos que los demandantes relacionan en la demanda, ya que evidentemente la situación presentada con la entidad demandante no es imputable a la interventoría, no hace parte del alcance de las obligaciones de su contrato

y no existe ninguna prueba técnica que concluya una responsabilidad a su cargo, por el contrario se observa el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Por lo anterior, no existe daño ni conducta imputable al contratista.

Asimismo, esta interventoría se permite manifestar que tampoco debe ser condenada solidariamente al pago de suma alguna por los supuestos daños y perjuicios materiales reclamados por ETB S.A. E.S.P., ya que:

1. No existe nexo causal directo entre la actuación de la interventoría y los daños alegados por la parte demandante. La interventoría no ejecutó físicamente ninguna de las obras ni intervino en la operación que presuntamente causó los perjuicios.
2. El objeto del contrato de interventoría se limita a la vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato principal, sin facultad alguna para ejecutar actos materiales ni ordenar la ejecución de obras o afectaciones sobre redes de servicios públicos.
3. El contratante IDU, como entidad estatal, es quien ejerce el poder de decisión sobre la ejecución del contrato de obra y quien debe responder frente a terceros por las consecuencias que se deriven de la misma, sin que se pueda trasladar responsabilidad alguna a la interventoría salvo que se pruebe culpa grave o dolo, elementos no acreditados en este proceso.
4. Finalmente, la condena solidaria solicitada no procede frente a esta interventoría, toda vez que su rol de tercero garante no implica corresponsabilidad económica por los daños ocasionados por el contratista o por decisiones de la entidad contratante.

Por lo anterior, se solicita negar la condena solidaria frente a esta interventoría y se reitera que no le corresponde asumir ninguna de las sumas pretendidas por el demandante.

Por todo lo expuesto, es claro que al no existir ninguna prueba que demuestre un nexo de causalidad de los daños presuntamente sufridos por la parte reclamante directamente relacionados con El daño a la infraestructura de la ETB, deberán ser negadas las pretensiones de la demanda y absolverse de toda responsabilidad a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

B). FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. PARA SER DEMANDADO

Aunado a lo expuesto en la excepción anterior, es claro que, al estar debidamente acreditado en el expediente que el alcance de las obligaciones de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. en la ejecución del contrato de interventoría se cumplieron en debida forma,



ajustadas a las condiciones técnicas pactadas, siendo liquidado el contrato en mención sin ningún tipo de llamado de atención contra la Interventoría, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en su favor, debiendo ser desvinculado del proceso al no tener relación alguna con el daño señalado en la demanda

El Consejo de Estado Rad. 29321, Sentencia del 08/04/2014, hizo referencia a la legitimación en la causa: “

Frente a lo anterior, el H. Consejo de Estado ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material; distinción que ha realizado en los siguientes términos:

“(...) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico...”

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”

En virtud de lo expuesto, se concluye que MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que:

- No existe vínculo jurídico directo con la parte demandante ETB S.A. E.S.P. que permita derivar una obligación de indemnizar o responder patrimonialmente frente a ella.



- El contrato de interventoría suscrito con el IDU no genera obligaciones frente a terceros, salvo que se acredite una actuación culposa o dolosa por parte de la interventoría, lo cual no ha sido probado ni se desprende del acervo fáctico del proceso.
- No se acredita participación alguna de esta interventoría en los hechos generadores del daño, ni material ni jurídicamente.
- La gestión de interventoría fue ejercida con diligencia y conforme al marco contractual y normativo vigente, como lo evidencian las múltiples comunicaciones remitidas al contratista y al IDU, así como las decisiones administrativas que sancionaron al verdadero responsable de los incumplimientos.
- A la fecha no existe acto administrativo, requerimiento ni comunicación oficial por parte del IDU que evidencie incumplimiento de la interventoría MAB Ingeniería de Valor S.A. Por el contrario, la misma ha cumplido con el seguimiento estricto, generando alertas y trasladando oportunamente los reportes, lo que evidencia diligencia técnica conforme al contrato
- Se cuenta con Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 26 de marzo de 2025 donde se evidencia el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales.

Por todo lo anterior, debe desvincularse a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. del presente proceso, por no ser la llamada legalmente a responder por los hechos descritos ni tener interés sustancial en la controversia.

C) FALTA DE MATERIAL PROBATORIO

Esto en cuanto a que las actas aportadas como pruebas no llevan la firma del residente de la obra o del interventor que son quienes pueden acreditar los hechos, por lo tanto, ETB no siguió el procedimiento adecuado para el reconocimiento de los supuestos daños causados con el fin de respaldar la afirmación del demandante ETB de que el perjuicio sufrido fue causado por el contratista CONSORCIO VIAL IDU.

No aportó el debido soporte de las *valoraciones en los documentos denominados “Acta de reconocimiento de daños a la infraestructura de red ETB”, “Informe de Mantenimiento”, “Costos Incurridos por ETB en la reparación de Daños” y “Registros Fotográficos” ya que no se logró visualizar los que demuestran las valoraciones 5 y 7.*

El demandante no aportó todas las actas de reconocimiento de daños que permitan determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar y las que fueron aportadas adolecen de estar correcta y completamente diligenciadas, ya que únicamente están suscritas por los funcionarios de la ETB

Al tartar de un formato diseñado y utilizado por el mismo Demandante, (ETB), pierde su credibilidad en el sentido en que no se diligenciaron todos los espacios del formato, el cual trae para incorporar cuatro (4) participantes en el diligenciamiento de la misma: El



Representante de ETB, el Residente de Obra, o en su defecto el Interventor de Obra o Contratista. Las actas que se aportaron solo están firmadas por ETB, por lo que no está debida suscrita, perdiendo su validez.

En caso de que no estuvieran presentes los demás interesados, tenía la opción de suscribirse por un testigo que dé fe de la situación, y a pesar de que así aparentemente se hizo, este testigo no fue citado para ratificar tal condición.

Del análisis de los hechos para demostrar el daño a la infraestructura de ETB no solo es necesario que se levante las valoraciones de estos, sino que también existan las actas de reconocimiento de daños, y que estas sean diligenciadas completa y correctamente, esto lo recalco porque estas actas son la prueba para soportar la demanda.

En consecuencia, se advierte que los documentos aportados por la parte demandante carecen de fuerza probatoria suficiente, al no cumplir los requisitos mínimos de idoneidad, autenticidad y contradicción exigidos por la ley procesal y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Las llamadas “actas de reconocimiento” no cuentan con la firma del contratista ni de esta interventoría, ni fueron ratificadas por terceros imparciales. Los soportes presentados no permiten determinar con certeza el modo, tiempo y lugar de los supuestos daños, ni acreditar que hayan sido ocasionados por acciones atribuibles al proyecto bajo interventoría de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Al no haberse practicado prueba válida, directa y eficaz que acredite el hecho generador del daño, su cuantía, ni su imputación jurídica o fáctica a esta parte, debe prosperar la excepción por falta de material probatorio, lo cual imposibilita que prospere cualquier pretensión indemnizatoria en contra de esta interventoría.

D) FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A Y EL DAÑO ALEGADO

Con todos los soportes documentales de la parte demandante y demandada, es evidente que no hay un nexo causal, entre el daño y las actividades adelantadas por la Interventoría MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Frente a este aspecto hago alusión a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Rad. 05001233100020010134601 (Exp. 30715), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta providencia, el Consejo de Estado reiteró que:

“para la procedencia de la responsabilidad extracontractual del Estado en una acción de reparación directa, resulta imprescindible la acreditación de los siguientes elementos: (i) la conducta u omisión atribuible a la entidad demandada, (ii) el daño antijurídico y (iii) el nexo

causal entre aquella y éste. En caso de que dicho nexo no se demuestre de manera clara y cierta, no es posible estructurar la responsabilidad patrimonial de la administración”.

De este modo, la Sección Tercera dejó sentado que la sola existencia del daño o la mera demostración de un actuar u omisión estatal no bastan para declarar responsabilidad, puesto que la imputación jurídica requiere la comprobación de que dicho actuar o dicha omisión fueron la causa eficiente del perjuicio. Ante la ausencia de prueba sobre la relación de causalidad, se rompe la imputación y, por consiguiente, se niega cualquier pretensión indemnizatoria.

Adicionalmente, la responsabilidad por los daños en la infraestructura de propiedad de ETB, recae directamente sobre el contratista de Obra, en virtud de las condiciones convenidas entre las partes (IDU -ETB) en donde en la CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO 1069 de 2026 se señala que “ (...) **El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario**”

No tiene fundamento jurídico que el IDU nos haya llamado en Garantía, por cuanto no existe nexo causal entre el daño alegado y las actividades desarrolladas por la empresa Interventora, máxime cuando MAB Ingeniería de Valor S.A ha venido adelantando todas las gestiones de Supervisión y Control diligentemente, tanto así que Instituto de desarrollo Urbano nunca adelantó contra nosotros, proceso sancionatorio alguno por incumplimiento en nuestras obligaciones, por el contrario, fuimos diligentes en nuestro seguimiento y control al contrato de Obra ya que por nuestros reiterados informes de presuntos incumplimientos al contratista de Obra, la Entidad pudo iniciar los respectivos procesos sancionatorios y multar al contratista, para lo cual se aporta las respectivas resoluciones que resolvieron los procesos sancionatorios en el acápite de pruebas.

No existe vínculo de causalidad entre nuestra actuación y el daño reclamado. La responsabilidad extracontractual exige un nexo entre la conducta y el perjuicio, lo que no se cumple en este caso conforme al artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

A la fecha no existe acto administrativo, requerimiento ni comunicación oficial por parte del IDU que evidencie incumplimiento de la interventoría MAB Ingeniería de Valor S.A. Por el contrario, la misma ha cumplido con el seguimiento estricto, generando alertas y trasladando oportunamente los reportes, lo que evidencia diligencia técnica conforme al contrato.

En virtud de lo expuesto, la interventoría no tiene responsabilidad sobre los daños sufridos sobre la Infraestructura de ETB, por lo tanto, no es el llamado a responder por los perjuicios materiales endilgados en la demanda y en el llamamiento en garantía.



E) EXCEPCIÓN DE AUSENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA FRENTE A ETB S.A. E.S.P.

No existe vínculo jurídico de ningún tipo entre MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB que obligue a la interventoría a resarcir los perjuicios reclamados. El contrato de interventoría se suscribió con el IDU y sus obligaciones se limitan exclusivamente a este vínculo contractual.

Al no haber una relación jurídica directa entre la interventoría y el tercero afectado, carece de fundamento legal cualquier pretensión indemnizatoria que se pretenda derivar, incluso en sede de responsabilidad extracontractual.

F) EXCEPCIÓN DE AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

El demandante no ha probado la configuración completa de ninguno de los regímenes de responsabilidad del Estado o sus contratistas (objetivo ni subjetivo), pues no se acreditó daño antijurídico, imputación ni nexo causal. Menos aún frente a esta interventoría, que no ejecutó obra alguna ni tuvo capacidad dispositiva o ejecutiva sobre el proyecto. La simple ocurrencia del daño no genera por sí sola responsabilidad.

G) EXCEPCIÓN GENÉRICA:

En el evento en que se llegue a probar una excepción diferente a las propuestas anteriormente, solicito al Despacho se decrete conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, las excepciones aplicables al proceso que nos ocupa en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la ley 1437 de 2011.

En consecuencia, conforme a los hechos, documentos y normas citadas, no concurre ninguno de los elementos estructurales que den lugar a responsabilidad extracontractual de esta interventoría, por lo que se solicita con todo respeto al despacho declarar no probadas las pretensiones formuladas en su contra.

CAPITULO II. **CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

1. CONTESTACIÓN SOBRE LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. Entre el IDU y el CONSORCIO VIAL IDU celebraron el Contrato de Obra No. 1279 de 2020, cuyo objeto es el siguiente:

“CLÁUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.

RESPUESTA: Es cierto, es lo estipulado contractualmente.

2. Con relación a la responsabilidad frente a terceros, la cláusula treinta y ocho (38) del contrato estableció lo siguiente:

“CLÁUSULA 38. INDEMNIDAD

El Contratista será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones de CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.”

RESPUESTA: Es cierto, es lo estipulado contractualmente, sin embargo, no es aplicable esta indemnidad dado que las circunstancias no son consecuencia de acciones u omisiones por parte de la Interventoría, ya que la obligación de pago de las reparaciones a los daños de la Infraestructura de propiedad de ETB es del contratista de obra. Se cuenta con Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 26 de marzo de 2025 donde se evidencia el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales.

3. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha sido demandado por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB, con ocasión al pago, por concepto de la reparación que debió efectuar a su infraestructura de red desde el 29 de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecución del Contrato de Obra No. 1279 de 2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial IDU integrado por las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM y el señor SAIN ESPINOSA MURCIA.

RESPUESTA: Es cierto, mediante radicado 1100333603820240014300 la ETB radicó acción legal ante el Juzgado 38 Administrativo Oral con la finalidad señalada.

4. Según el demandante el contratista CONSORCIO VIAL IDU, realizaba obras constructivas en el momento y lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.



RESPUESTA: Es cierto, el Consorcio Vial IDU realizaba obras en el lugar indicado por el demandante, sin embargo, se debe probar en el proceso por parte de ETB o del Consorcio Contratista de Obra si los daños ocurrieron o no en el lugar donde se ejecutó obra en virtud del contrato 1279 de 2020.

5. Según el demandante la ejecución del Contrato de Obra No.1279 de 2020, ejecutado por el contratista CONSORCIO VIAL IDU, le ocasionó un daño en su infraestructura que le causó perjuicios materiales a la ETB.

RESPUESTA: No nos consta, dado que el Contratista de Obra no aportó ningún reporte de daños a la interventoría de conformidad a la obligación No 6 del numeral 14.3.6 del Contrato de Obra N°. 1279 de 2020, aclarando que el Consorcio Vial IDU fue el contratista de obra seleccionado y contratado por el Instituto de Desarrollo Urbano y el daño que éste ocasionó durante la ejecución de la obra contratada fue a un tercero, en este caso la ETB. Los daños solamente están respaldados por las actas y documentos de valoración de los daños aportados en el proceso por ETB, sin embargo, se aclara que el daño no fue ocasionado por la Interventoría, ni existe el nexo causal entre los daños a la infraestructura y MAB Ingeniería de Valor S.A, que le causara perjuicios materiales a ETB.

6. Existe un convenio marco IDU-ETB No. 1069-2016 que establece los acuerdos que rigen la relación entre el IDU y la ETB para la ejecución de redes de telecomunicaciones en los proyectos de infraestructura que ejecuta el IDU, en dos sentidos: protecciones y traslados por necesidad del proyecto vial del IDU y/o por solicitud de obras para redes de telecomunicaciones de la ETB.

RESPUESTA: Es cierto, existe un convenio marco IDU-ETB No.1069-2016 que establece los acuerdos que rigen la relación entre el IDU y la ETB

6. (SIC) Durante la ejecución de las obras, en algunas ocasiones y por múltiples razones se producen daños que, obviamente, evitan la continuidad de la prestación del servicio, razón por la cual el tema daños se ha incluido en el clausulado del convenio, de la siguiente manera:

“(…)

SÉPTIMA: PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB

(…) PARÁGRAFO PRIMERO: ETB pagará con cortes de obra realizados por la interventoría IDU, inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los diseños, para lo cual se efectuará el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitirá a ETB el informe de ejecución de obras para el (los) respectivo (s) tramo (s) funcional (es) acordado en los diseños, anexando los siguientes documentos:

(…) e. Paz y Salvo por concepto de pago de daños a infraestructura de la ETB, a partir de la valoración de los daños originada por ETB.

(…)

NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: *El IDU a través de su Contratista deberá prever mecanismos para garantizar la preservación de la red y la infraestructura de*



propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de daño y hurto a que se ven expuestas por efecto de la ejecución de las obras dentro del límite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario.

(...)

RESPUESTA: Es cierto, las cláusulas mencionadas en el hecho son las del convenio, resaltando que este es claro en indicar que “*el Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario.*” por lo que reafirma que la Interventoría no tiene responsabilidad alguna.

6. (SIC) Entre el IDU y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., con Nit 900.139.110-5, se celebró contrato de interventoría No.1504 de 2020 cuyo objeto es el siguiente:

“CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.”

RESPUESTA: Es cierto, es lo señalado en el objeto del contrato de interventoría No.1504 de 2020.

Y las obligaciones del contratista interventor referente a los hechos de esta demanda son:

“12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 23. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista contenidas en el contrato de obra, anexos, documentos del proceso de selección y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el INTERVENTOR”

RESPUESTA: Es cierto, y esto se ve respaldado en las actuaciones y seguimiento realizado por la Interventoría, la cual como se ha venido indicando, realizó todas las gestiones pertinentes y trasladó al contratista de obra todas las solicitudes de ETB o del IDU referentes a lograr la revisión y pago de las reparaciones a la infraestructura de ETB.

Además, se evidencia cumplimiento de la interventoría a todas sus obligaciones contractuales, ya que a la fecha no existe acto administrativo, requerimiento ni comunicación oficial por parte del IDU que evidencie incumplimiento de la interventoría MAB Ingeniería de Valor S.A. Por el contrario, la misma ha cumplido con el seguimiento estricto,



generando alertas y trasladando oportunamente los reportes, lo que evidencia diligencia técnica conforme al contrato.

Es pertinente precisar que no puede concluirse que las obligaciones que asume el interventor están sujetas a la condición de que el contratista cumpla las obligaciones bajo el contrato de obra y que en la medida en que estas no se cumplan tampoco nació a la vida jurídica la obligación del interventor, porque la diferencia entre las obligaciones de medio y de resultado se limita a definir los parámetros de responsabilidad de las partes, pero no convierten la obligación de medio en una obligación modal. (Sentencia con Radicado No 11001-03-26-000-2017-00013-00(58647))

7. El contrato de interventoría suscrito entre el IDU y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A, No. 1504 de 2020 tiene el deber de garantizar una ejecución adecuada y transparente del contrato de obra 1279 de 2020, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

RESPUESTA: Es cierto. deber que se cumplió a cabalidad por parte de la Interventoría, inclusive a la fecha se cuenta con acta de recibo a satisfacción por parte del IDU a MAB ingeniería de Valor S.A y acta de liquidación donde se evidencia que se cumplió con todos nuestros deberes como interventores. Es de vital importancia mencionar la gestión del Interventor ante el Consorcio Vial IDU en relación con los daños a la infraestructura ETB, los cuales se gestionaron mediante las siguientes comunicaciones y/o Comités:

- En el Acta de Comité N° 74 del 11 de noviembre de 2022, mediante el cual, el contratista quedó notificado de lo siguiente: *ETB: “La ETB solicita realizar un recorrido para verificar el cableado que está quedando expuesto y la viabilidad de la proyección de las redes, la ETB envió un acta de reparación de daños de los cables de 900 pares en la Calle 94 con Carrera 15 y se programó el recorrido para el 15 de noviembre del 2022 y realizar la protección de las redes y la legalización del acta de reparación de daños”.*
- MAB-2-1504-1057-22 del 13 de octubre de 2022 con recibido del contratista No 1756 2020 con asunto: Comunicación sobre afectaciones a infraestructura de las ESP en el proceso de excavaciones. (*Aquí 1) La Interventoría hace un llamado de atención al contratista, ya que se ha evidenciado que, en el proceso constructivo de la infraestructura proyectada para las redes secas, está realizando excavaciones que afectan notablemente la integridad y conservación en óptimo estado de las redes existentes de las ESP. 2- La Interventoría solicita al contratista presentar un informe completo y detallado sobre las medidas preventivas que asumirá para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura existente de las ESP y las medidas correctivas tomadas para dar solución a los casos de afectaciones generadas a las ESP, tales como las que se incluyen en el registro fotográfico, sin limitarse únicamente a las mismas, sino a todas las que se han presentado.*)
- MAB-2-1504-0165-23 del 1º de febrero de 2023 con radicado 20235260365132 de asunto: Traslado del oficio STESV 20233360130201 del 30 de enero del 2023

Remisión comunicado 2023- 0016-ECC-EIGC, con radicado IDU 20235260128012 del 27/01/2023 – Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB.

- MAB-2-1504-0287-23 del 21 de febrero de 2023 con radicado 20235260365132 de asunto: Traslado del oficio 2023-0194-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0367-23 del 6 de marzo de 2023 con radicado 20235260518302 de asunto: Remisión oficio 2023-0237- ECC-EIGC, Valoración de daños sobre la infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0410-23 del 10 de marzo de 2023 con radicado 20235260518302 de asunto: GTC. Contrato de Obra 1279 de 2020. Traslado del oficio STESV 20233360315621 del 6 de marzo del 2023 Remisión de valoración de daños sobre infraestructura ETB.
- MAB-2-1504-0735-23 del 16 de mayo de 2023 con radicado 20235260877322 de asunto Traslado del oficio 2023-0411-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.
- MAB-2-1504-0813-23 del 6 de junio de 2023 con radicado 202352601081132 de asunto: Respuesta a su oficio OBR.90-1279-OFC-2720 calendado el 25 de mayo de 2023. Solicitud formal para la consolidación y programación de una mesa de trabajo de índole jurídico daños infraestructura ETB.
- MAB-2-1504-0989-23 del 4 de julio de 2023 con radicado 202352601365332 de asunto: Traslado del oficio 2023-0936-ECCEIGC Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.”
- MAB-2-1504-1306-23 del 10 de octubre de 2023 con radicado 202352601815542 de asunto: GTC. Contrato de obra IDU 1279 de 2020. Traslado oficio 2023- 1532-ECC-EIGC. Solicitud entrega de soportes de pago de daños en la infraestructura de ETB para el trámite de Paz y Salvo de la ESP ETB.

Con lo anterior se evidencia, que la Interventoría dio traslado a las comunicaciones del IDU y de ETB al contratista de obra, con la finalidad de que se verificara los daños reportados por la ESP, constatará que estén en los límites de intervención del proyecto para que se gestionara el respectivo pago de los daños a la infraestructura de propiedad de ETB, o de considerarlo necesario objetar con los argumentos necesarios, para los acercamientos y acuerdos de pago con ETB.

Adicional a lo expresado en relación con las múltiples comunicaciones emitida al contratista sobre el particular, cabe agregar el estado de los procesos administrativos, que solicitó esta Interventoría al Instituto, precisando que corresponden a la aplicación de MULTAS y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, en donde se multó al contratista por los presuntos incumplimientos a saber, entre ellos la solicitud de aplicación de la Cláusula Penal, por no obtener los paz y salvos de las empresas de servicios públicos, entre estas ETB, la entrega de la infraestructura a cada una de las ESP para el recibo a satisfacción, y así cumplir con todos los requisitos por parte del contratista de obra para la liquidación del contrato:

Por lo anterior, procedo a indicar textualmente lo señalado en la resolución que resolvió de fondo el proceso administrativo sancionatorio:



- **“RESOLUCIÓN NÚMERO 3949 DE 2023**

“Por medio de la cual se resuelve de fondo el procedimiento administrativo sancionatorio surtido en el contrato IDU 1279-2020”

“ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 1279-2020 cláusula 14, numeral, 14.1 subnumerales, 6, 9, 12,15, 22, numeral 14.3. numeral 14.3.1 subnumerales 1, 9, 13, 14,15, numeral 14.4 numeral 14.3.4 numerales 4 y 6, numeral 14.4.2., Cláusula 24, Apéndice E apartado 3 numeral 3.4. numeral 3.4.2, apartado 4 numeral 4.1.9., Manual de Interventoría y supervisión v9 numerales 5,2, 6.3 subnumeral 6.3.3., 7.5. del Contrato IDU-1279-2020 suscrito con el CONSORCIO VIAL IDU identificado con NIT 901.407.148-8, integrado por ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S NIT 806.016.855-4 PARTICIPACION 30%, INNOVACONST S.A.S. NIT: 900.154.746-1 PARTICIPACION 20%, INGESEM S.A.S NIT: 900.159.439-8 PARTICIPACION 20%, SAIN ESPINOSA MURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTICIPACION 30%, cuyo objeto es: “Realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.”, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.”

- **RESOLUCIÓN NÚMERO 5017 DE 2023**

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 3949 de 14 de agosto de 2023” 1279 2020

“ARTÍCULO PRIMERO. - RECHAZAR, en los términos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo, las pruebas aportadas y solicitadas por el CONSORCIO VIAL IDU y por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.”

- **RESOLUCIÓN NÚMERO 5482 DE 2023**

“Por medio de la cual se resuelve de fondo el procedimiento administrativo sancionatorio surtido en el contrato IDU 1279-2020”

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No. 1279-2020 suscrito con el CONSORCIO VIAL IDU identificado con NIT 901.407.148-8, integrado por ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S NIT 806.016.855-4 PARTICIPACION 30%, INNOVACONST S.A.S. NIT: 900.154.746- 1 PARTICIPACION 20%, INGESEM S.A.S NIT: 900.159.439-8 PARTICIPACION 20%, SAIN 1 ESPINOSA MURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTICIPACION 30%, cuyo objeto es: “Realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y



CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.”, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. **ARTÍCULO SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior **IMPONER Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL** prevista en la cláusula 26 del contrato 1279-2020 por el valor de **SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE (\$7.516.294.902,00)**, por las razones expuestas en el presente acto administrativo la cual deberá ser cancelada dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, una vez en firme el presente acto administrativo. **PARÁGRAFO** En caso en que los citados no se avengan a cancelar la suma ordenada en los plazos mencionados, la Entidad dará inicio a los trámites de cobro coactivo y/o judicial a los que hubiera lugar frente al contratista y/o su garante. **ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO** amparado por la póliza única de garantía con No. 8001004447 expedida por la compañía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. siendo el asegurado/afianzado y beneficiario el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y cuyo objeto es el amparo de cumplimiento de las obligaciones del Contrato IDU-1279-2020, en el evento en que el Contratista se abstenga de efectuar el pago de la cláusula penal aquí impuesta y de conformidad con los límites de los valores asegurados tal como quedó contemplado en la parte motiva del presente acto administrativo. **ARTÍCULO CUARTO:** Para todos los efectos legales el presente acto administrativo presta mérito ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia de lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso. **ARTÍCULO QUINTO:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición de acuerdo con lo previsto en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en audiencia. **ARTÍCULO SEXTO:** NOTIFICAR en audiencia el contenido del presente acto administrativo al contratista y a la Compañía Aseguradora a través del Representante Legal o su apoderado conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, **PUBLÍQUESE** en el SECOP y **COMUNÍQUESE** a la Cámara de Comercio en la que se encuentre inscrito el contratista, así como a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del Decreto 019 de 2012. **ARTÍCULO OCTAVO:** ARCHIVAR el expediente una vez en firme esta decisión.

- **RESOLUCIÓN NÚMERO 2320 DE 2024**

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 5482 de 22 de noviembre de 2023” 1279 2020

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR los artículos primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la Resolución 5482 de 22 de noviembre de 2023 de conformidad con lo expuesto en este acto administrativo. **ARTÍCULO SEGUNDO.** MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 5482 de 22 de noviembre de 2023 por las razones expuestas en el presente acto administrativo, el cual quedará de la siguiente manera:



ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior IMPONER Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL prevista en la cláusula 26 del contrato 1279- 2020 por el valor de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$5.737.187.898), por las razones expuestas en el presente acto administrativo la cual deberá ser cancelada por el contratista dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, una vez en firme el presente acto administrativo. **PARÁGRAFO** En caso en que los citados no se avengan a cancelar la suma ordenada en los plazos mencionados, la Entidad dará inicio a los trámites de cobro coactivo y/o judicial a los que hubiera lugar frente al contratista y/o su garante. **ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR** el artículo tercero de la Resolución 5482 de 22 de noviembre de 2023 por las razones expuestas en el presente acto administrativo, el cual quedará de la siguiente manera: **ARTÍCULO TERCERO. -. DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO** amparado por la póliza única de garantía con No. 8001004447 expedida por la compañía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., hasta por el límite del valor asegurado, en la que actúa como tomador/garantizado el CONSORCIO VIAL IDU y como asegurada el Instituto de Desarrollo Urbano, y cuyo objeto es el amparo de cumplimiento de las obligaciones del Contrato IDU-1279- 2020, en el evento en que el contratista se abstenga de efectuar el pago de la cláusula penal aquí impuesta en el plazo establecido para ello, en tal caso se hará efectivo el valor de esta con cargo a la Póliza de Cumplimiento 8001004447, de conformidad con lo planteado en el artículo 1080 del Código de Comercio. **ARTÍCULO CUARTO.** De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la presente resolución se notifica en audiencia. **ARTÍCULO QUINTO.** La presente decisión quedará en FIRME al día siguiente de su notificación, de conformidad con el artículo 87 del CPACA. Dese cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 5482 de 2023. **ARTÍCULO SEXTO.** Según lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley 80 de 1993 y 86 de la Ley 1474 de 2011, contra esta resolución NO procede recurso alguno **ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA** La presente resolución rige a partir de su notificación.

Cabe agregar que con la comunicación MAB-1-1504-0132-24 de radicado IDU 202452601998762 del 25 de noviembre de 2024 se remitió el listado de posibles perjuicios y afectaciones que el no cumplimiento del objeto del Contrato de Obra No. 1279 de 2020 podía acarrear para el IDU, entre estos, se tuvo en cuenta por parte de la Interventoría, el perjuicio de no pago de daños a la infraestructura de las empresas de servicios públicos, incluyendo a ETB, incumplimiento del Anexo C “Redes Secas” y se le recuerda al IDU que de acuerdo con lo establecido en el resuelve de la Resolución No. 2320 de 2024 que confirma lo dispuesto en la Resolución No. 5482 del 22 de noviembre de 2023, que hizo efectiva la Cláusula Penal prevista en la cláusula 26 del contrato IDU-1279-2020, el perjuicio correspondió a la suma de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$5.737.187.898), por lo que el IDU cuenta con el recurso que le permite cubrir los perjuicios que a la fecha se hayan materializado y de no ser suficiente, la Entidad puede instaurar en sede administrativa las reclamaciones a que haya lugar para requerir el respectivo pago por parte del Consorcio Vial IDU.



2. PRETENSIONES:

(No se plantearon por parte del IDU pretensiones para el llamamiento en garantía)

3. SOBRE LA SOLICITUD DEL LLAMAMIENTO Y FUNDAMENTOS

“El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación, por lo cual solicito a su Despacho el llamamiento en garantía a la firma interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A, teniendo en cuenta lo consagrado expresamente en el art. 64 del C.G.P, en concordancia con el artículo 225 del C.P.A.C.A.

Con base en los siguientes fundamentos:

PRIMERO. - Entre el llamado y el llamante en garantía se suscribió y se ejecutó el contrato de interventoría No. 1504 de 2020, entre el interventor MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, cuyo objeto consiste en “realizar la: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.”. Del contrato de obra 1279 de 2020 que fue ejecutado por el contratista CONSORCIO VIAL IDU.

SEGUNDO. - El citado contrato 1279 tiene por objeto la construcción de las aceras y ciclorutas de las calles 92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias, para la ciudad de Bogotá, donde aparentemente ocurrieron los hechos objeto de esta demanda, y en los cuales estuvo supuestamente involucrado el frente de obra del Contrato No. 1279 de 2020 a cargo del CONSORCIO VIAL IDU, por esta razón se realiza el llamamiento en garantía soportado por el contrato de Interventoría 1504 de 2020.

TERCERO. - Mediante el mencionado contrato el IDU está cumpliendo con su función de contribuir a la construcción y sostenimiento de la malla vial y la red de ciclorutas y a través de la ejecución de labores y actividades de construcción, mantenimiento y rehabilitación.

CUARTO. - Con base en el contrato se tiene que el contratista se compromete a constituir a favor del IDU una garantía única cuyo objeto es el cumplimiento de todas y cada una de la de las obligaciones que surjan del contrato, y también a constituir póliza que cubre responsabilidad civil extracontractual en que incurra. Las pólizas son exigibles en caso de una eventual condena.



RESPUESTA:

Frente a los numerales primero a cuarto es preciso indicar que sin bien se suscribió el contrato de Interventoría 1504 de 2020, para realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.". Del contrato de obra 1279 de 2020 que fue ejecutado por el contratista CONSORCIO VIAL IDU y que en virtud del contrato de interventoría se expidieron las pólizas de cumplimiento y de RCE, no es posible que se haga efectiva nuestra garantía en virtud de que es **IMPROCEDENTE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AL NO TENER POR OBJETO CUBRIR EL DAÑO ESPECIAL** alegado por el demandante.

4. RAZONES DE LA DEFENSA:

El llamamiento en garantía es la facultad legal que, como consecuencia del contrato o de la ley, tiene el demandado para pedir a su garante satisfacer la posible condena que se ha de imponer. Esta institución de orden procesal se encuentra prevista en el artículo 64 del Código General del Proceso. Las garantías constituidas contractualmente o por mandato de la ley, da al demandado la facultad de llamar en garantía al garante. Se presenta siempre que entre la persona citada y la que la hace citar exista una relación de garantía.

La génesis de esta figura jurídica opera por mandato contractual o por ministerio legal. El profesor Devis Echandia, explica al respecto:

“con alguna frecuencia ocurre que una de las partes -demandante o demandada- tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar como resultado. Bien por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona.

Se concibe al llamamiento en garantía como una figura que concreta el principio de economía procesal y que consiste en la posibilidad de que una de las partes solicite la vinculación al proceso de un tercero denominado llamado en garantía, para que se defina, bajo el mismo cauce procesal, la relación sustancial existente entre el solicitante y el llamado en garantía, cuando quiera que entre uno y otro exista un vínculo que tenga origen en la ley o en un contrato, que le permita al primero (solicitante) exigir del segundo (llamado en garantía) la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.



Así pues, la finalidad del llamamiento en garantía no es otra que la de evitar el desgaste del aparato jurisdiccional y de las partes y permitir que, a través de un solo proceso, se resuelvan todas las relaciones jurídicas de carácter sustancial que tengan origen en los mismos hechos. Ahora bien, se colige del artículo 225 del CPACA que, la solicitud de llamamiento en garantía no solo debe cumplir con los requisitos formales exigidos por la misma, sino que además es necesario que del escrito se evidencie una relación sustancial por la cual el llamado pueda responder por los resultados del proceso. Así, ha sido el mismo Consejo de Estado quien ha manifestado que para que proceda la intervención de un tercero en calidad de garante, debe existir una relación en la que se evidencie que el llamado en garantía está obligado a resarcir un daño, pues de lo contrario, la vinculación del mismo no tendría un fundamento legal para responder."
Negrita y subrayado fuera de texto original.

Este llamado en garantía que nos hace el Instituto de Desarrollo Urbano, carece de nexos causal dado que:

1. EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ES UN CONTRATO PRINCIPAL Y AUTÓNOMO DEL CONTRATO VIGILADO.

El Contrato de Interventoría, es un contrato típico, autónomo e independiente, el cual se encuentra definido en el artículo 32 numeral 2 de la ley 80 de 1993, y es una especie dentro del género de contratos de consultoría dado su carácter técnico y especializado, como lo ha resaltado el Consejo de Estado, de la siguiente manera:

"... corresponde a una especie del contrato de consultoría cuyo objeto concreto consiste en el control, vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una entidad estatal, en nombre y representación de ella".

En este punto, es importante resaltar que, pese a que el contrato de interventoría, generalmente, está ligado a un contrato principal sobre el cual se ejerce el control y seguimiento, esto no implica que dicho contrato esté circunscrito al principal, puesto que el contrato de interventoría no es accesorio, sino que también tiene la condición de principal y autónomo, como lo ha señalado el Consejo de Estado en varias oportunidades, así:

"Si bien es cierto que el objeto del contrato de interventoría supone y exige, según ya se indicó, la coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la dirección misma de otro contrato diferente, lo cierto es que la interventoría subsiste a pesar de la extinción de la obligación principal o de la finalización del contrato que aparece como principal, al cual debe su existencia. Adicionalmente, la interventoría no se encuentra circunscrita a aspectos técnicos del contrato que se pretende controlar, sino que puede abarcar la vigilancia y control de las condiciones financieras y económicas del mismo (...) vii) Puede tratarse de un contrato de ejecución sucesiva o de uno de ejecución instantánea. El objeto del contrato de interventoría lo constituye la coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la



dirección misma de una, varias o todas las obligaciones derivadas de un contrato o contratos específicos; lo anterior implica que tanto la existencia misma del contrato de interventoría como su ejecución no se encuentran necesariamente atadas a la existencia o el cumplimiento de otro contrato estatal, sino que dependen de sus propias obligaciones principales y autónomas...” (Subraya y negrilla por fuera del texto original)

Esa categoría del contrato de interventoría, como un contrato principal ha sido reiterada en varios pronunciamientos del Consejo de Estado, tal como se puede evidenciar en el siguiente pronunciamiento:

“Sobre el primer aspecto, es importante resaltar que el contrato de interventoría es un contrato principal y no accesorio del contrato cuya vigilancia y control se basa el de interventoría. Así lo ha sostenido la Corporación:

“El contrato de interventoría es principal y autónomo. Si bien es cierto que el objeto del contrato de interventoría supone y exige, según ya se indicó, la coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la dirección misma de otro contrato diferente lo cierto es que la interventoría subsiste a pesar de la extinción de la obligación principal o de la finalización del contrato que aparece como principal, al cual debe su existencia...”.”

En este orden de ideas, la categoría del contrato de interventoría como principal y autónomo obedece a que éste tiene condiciones y obligaciones propias y su existencia, ejecución y cumplimiento no dependen de la ejecución del contrato objeto de seguimiento y control.

De ahí que sea imposible para el interventor en responder por los eventos en que se presenten incumplimientos por parte del contratista del contrato de obra, toda vez que se generaría una dependencia del contrato de interventoría al contrato de obra, lo cual desnaturalizaría las características del contrato de interventoría.

5. EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTOS PARA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

A.) IMPROCEDENCIA DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AL NO TENER POR OBJETO CUBRIR EL DAÑO ESPECIAL

Las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se declare a las demandadas administrativamente responsables por el presunto daño, derivados de las obras adelantadas en el contrato de Obra No IDU 1279 de 2020 y que en caso de condenarse al IDU, se haga efectiva la póliza RCE de nuestro contrato de Interventoría.

Se recuerda que los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad del estado son:

- Subjetivo (falla en el servicio) y
- Objetivo (riesgo excepcional y daño especial)



Al revisar el alcance de la cobertura de nuestra póliza se puede observar claramente en su carátula su alcance:

“MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO #1504 DE 2020 REFERENTE A LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.”

Se concluye en primera medida que, para poder analizar la ocurrencia de un siniestro con cargo a nuestras pólizas, deberá probarse que los supuestos daños sufridos por la parte actora le sean imputables al asegurado – MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. (régimen subjetivo toda vez que deberá analizarse si media la culpa y el nexo causal con el daño).

En consecuencia, si la construcción de obras del proyecto con dicha obra presuntamente se generó un daño especial (Daño a la infraestructura de propiedad de ETB) que implica un rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, será única y exclusivamente el Estado el que deba reparar e indemnizar, por cuanto es su deber velar por restablecer el equilibrio perdido, en virtud del contrato social.

“En asuntos en los que el origen o la causa del daño deviene del ejercicio de una actividad lícita por parte de la administración, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo de daño especial, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando el demandante acredite que, con ocasión de dicha actividad, se produjo un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tenía por qué asumir. (...) se trata de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o una falla atribuible a la administración, sino el ejercicio de actividades legítimas que pueden causar daños a los administrados, quienes en aras de que se les garantice la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados.

Así mismo, el régimen de responsabilidad por daño especial se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos:

1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legítima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar determinados administrados. 2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular. 3.- Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado”



Así las cosas, es claro que en el presente proceso donde se analiza la ocurrencia de un daño tal y como lo solicita la parte actora, no será posible analizar algún tipo de responsabilidad a cargo de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. como interventoría, quien en ejercicio de sus actividades contractuales, dio cumplimiento al alcance del contrato, siendo totalmente improcedente analizar alguna responsabilidad a su cargo al no mediar ningún tipo de culpa que se le pueda imputar en los hechos objeto de debate.

Por lo anterior, es clara la improcedencia de responder por unos daños que está debidamente demostrado que fueron causados por el contratista de obra, o de este considerar que no tenía responsabilidad, haber efectuado las observaciones respectivas para llegar a acuerdos con ETB, y además por cuanto la responsabilidad por los daños presentados en la infraestructura de red de ETB en los tramos donde se ejecutó el Contrato No. 1279 de 2020, está a cargo tanto, del Instituto de Desarrollo Urbano como de las personas que conforman el Consorcio Vial IDU, teniendo en cuenta que durante la ejecución de las obras, en algunas ocasiones y por múltiples razones se producen daños que, obviamente, evitan la continuidad de la prestación del servicio, razón por la cual el tema daños se ha incluido en el clausulado del Convenio Marco No 1069 de 2016 (convenio No 4600015905 del 7 de diciembre de 2016), celebrado entre el IDU y ETB en el cual claramente se indicó frente a la responsabilidad de los daños a la infraestructura de ETB lo siguiente:

“(…)

SÉPTIMA: PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB

(…) PARÁGRAFO PRIMERO: ETB pagará con cortes de obra realizados por la interventoría IDU, inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los diseños, para lo cual se efectuará el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitirá a ETB el informe de ejecución de obras para el (los) respectivo (s) tramo (s) funcional (es) acordado en los diseños, anexando los siguientes documentos:

(…) e. Paz y Salvo por concepto de pago de daños a infraestructura de la ETB, a partir de la valoración de los daños originada por ETB.

(…)

NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: El IDU a través de su Contratista deberá prever mecanismos para garantizar la preservación de la red y la infraestructura de propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de daño y hurto a que se ven expuestas por efecto de la ejecución de las obras dentro del límite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario. (…)_Subrayado y Negrita fuera de texto original.



Así las cosas, sobre el análisis de la afectación de la póliza en caso de llegar a prosperar las pretensiones de la demanda, estas, no están relacionadas con la naturaleza propia del contrato de seguro de responsabilidad civil y sus riesgos asegurados.

B.) FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Es claro que, al estar debidamente acreditado en el expediente que el alcance de las obligaciones de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. en la ejecución del contrato de interventoría, y que se cumplieron en debida forma, ajustadas a las condiciones técnicas pactadas, siendo liquidado el contrato en mención sin ningún tipo de llamado de atención contra la Interventoría, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en su favor, debiendo ser desvinculado del proceso al no tener relación alguna con el daño señalado en la demanda.

El Consejo de Estado Rad. 29321, Sentencia del 08/04/2014, hizo referencia a la legitimación en la causa: “

Frente a lo anterior, el H. Consejo de Estado ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material; distinción que ha realizado en los siguientes términos:

“(…) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico...”

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la



existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”

En virtud de lo expuesto, se concluye que MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que:

- No existe vínculo jurídico directo con la parte demandante ETB S.A. E.S.P. que permita derivar una obligación de indemnizar o responder patrimonialmente frente a ella.
- El contrato de interventoría suscrito con el IDU no genera obligaciones frente a terceros, salvo que se acredite una actuación culposa o dolosa por parte de la interventoría, lo cual no ha sido probado ni se desprende del acervo fáctico del proceso.
- No se acredita participación alguna de esta interventoría en los hechos generadores del daño, ni material ni jurídicamente.
- La gestión de interventoría fue ejercida con diligencia y conforme al marco contractual y normativo vigente, como lo evidencian las múltiples comunicaciones remitidas al contratista y al IDU, así como las decisiones administrativas que sancionaron al verdadero responsable de los incumplimientos.
- A la fecha no existe acto administrativo, requerimiento ni comunicación oficial por parte del IDU que evidencie incumplimiento de la interventoría MAB Ingeniería de Valor S.A. Por el contrario, la misma ha cumplido con el seguimiento estricto, generando alertas y trasladando oportunamente los reportes, lo que evidencia diligencia técnica conforme al contrato
- Se cuenta con Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 26 de marzo de 2025 donde se evidencia el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales.

Por todo lo anterior, debe desvincularse a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. del presente proceso, por no ser la llamada legalmente a responder por los hechos descritos ni tener interés sustancial en la controversia.

C.) FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A Y EL DAÑO ALEGADO

Con todos los soportes documentales de la parte demandante y demandada, es evidente que no hay un nexo causal, entre el daño y las actividades adelantadas por la Interventoría MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Frente a este aspecto hago alusión a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Rad. 05001233100020010134601 (Exp. 30715), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta providencia, el Consejo de Estado reiteró que:



“para la procedencia de la responsabilidad extracontractual del Estado en una acción de reparación directa, resulta imprescindible la acreditación de los siguientes elementos: (i) la conducta u omisión atribuible a la entidad demandada, (ii) el daño antijurídico y (iii) el nexo causal entre aquélla y éste. En caso de que dicho nexo no se demuestre de manera clara y cierta, no es posible estructurar la responsabilidad patrimonial de la administración”.

De este modo, la Sección Tercera dejó sentado que la sola existencia del daño o la mera demostración de un actuar u omisión estatal no bastan para declarar responsabilidad, puesto que la imputación jurídica requiere la comprobación de que dicho actuar o dicha omisión fueron la causa eficiente del perjuicio. Ante la ausencia de prueba sobre la relación de causalidad, se rompe la imputación y, por consiguiente, se niega cualquier pretensión indemnizatoria.

Adicionalmente, la responsabilidad por los daños en la infraestructura de propiedad de ETB, recae directamente sobre el contratista de Obra, en virtud de las condiciones convenidas entre las partes (IDU -ETB) en donde en la **CLÀUSULA NOVENA DEL CONVENIO 1069 de 2026** se señala que “ (...) **El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los daños causados a la infraestructura de redes dentro del área a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos daños serán pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 días calendario**”

No tiene fundamento jurídico que el IDU nos haya llamado en Garantía, por cuanto no existe nexo causal entre el daño alegado y las actividades desarrolladas por la empresa Interventora, máxime cuando MAB Ingeniería de Valor S.A ha venido adelantando todas las gestiones de Supervisión y Control diligentemente, tanto así que Instituto de desarrollo Urbano nunca adelantó contra nosotros, proceso sancionatorio alguno por incumplimiento en nuestras obligaciones, por el contrario, fuimos diligentes en nuestro seguimiento y control al contrato de Obra ya que por nuestros reiterados informes de presuntos incumplimientos al contratista de Obra, la Entidad pudo iniciar los respectivos procesos sancionatorios y multar al contratista, para lo cual se aporta las respectivas resoluciones que resolvieron los procesos sancionatorios en el acápite de pruebas.

No existe vínculo de causalidad entre nuestra actuación y el daño reclamado. La responsabilidad extracontractual exige un nexo entre la conducta y el perjuicio, lo que no se cumple en este caso conforme al artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En virtud de lo expuesto, la interventoría no tiene responsabilidad sobre los daños sufridos sobre la Infraestructura de ETB, por lo tanto, no es el llamado a responder por los perjuicios materiales endilgados en la demanda y en el llamamiento en garantía.

A la fecha no existe acto administrativo, requerimiento ni comunicación oficial por parte del IDU que evidencie incumplimiento de la interventoría MAB Ingeniería de Valor S.A. Por el contrario, la misma ha cumplido con el seguimiento estricto, generando alertas y



trasladando oportunamente los reportes, lo que evidencia diligencia técnica conforme al contrato.

D). EXCEPCIÓN: AUSENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA FRENTE A ETB S.A. E.S.P.

No existe vínculo jurídico de ningún tipo entre MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB que obligue a la interventoría a resarcir los perjuicios reclamados. El contrato de interventoría se suscribió con el IDU y sus obligaciones se limitan exclusivamente a este vínculo contractual.

Al no haber una relación jurídica directa entre la interventoría y el tercero afectado, carece de fundamento legal cualquier pretensión indemnizatoria que se pretenda derivar, incluso en sede de responsabilidad extracontractual. Esta excepción refuerza además la falta de legitimación en la causa por pasiva y la improcedencia del llamamiento en garantía.

E) EXCEPCIÓN DE AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

El demandante no ha probado la configuración completa de ninguno de los regímenes de responsabilidad del Estado o sus contratistas (objetivo ni subjetivo), pues no se acreditó daño antijurídico, imputación ni nexo causal. Menos aún frente a esta interventoría, que no ejecutó obra alguna ni tuvo capacidad dispositiva o ejecutiva sobre el proyecto. La simple ocurrencia del daño no genera por sí sola responsabilidad.

F) EXCEPCIÓN GENÉRICA:

En el evento en que se llegue a probar una excepción diferente a las propuestas anteriormente, solicito al Despacho se decrete conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable al proceso que nos ocupa en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la ley 1437 de 2011.

En consecuencia, conforme a los hechos, documentos y normas citadas, no concurre ninguno de los elementos estructurales que den lugar a responsabilidad extracontractual de esta interventoría, por lo que se solicita con todo respeto al despacho declarar no probadas las pretensiones formuladas en su contra.

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento las contestaciones que aquí se presentan en los artículos 1602 y siguientes del Código Civil, en los artículos 1036, 1127 y siguientes del Código de Comercio, en los artículos 96 y siguientes del Código General del Proceso y en las demás normas concordantes y complementarias.

7. PRUEBAS Y ANEXOS

Con el propósito de evitar duplicidad de información y facilitar el análisis del acervo probatorio, solicito respetuosamente al Despacho que se tengan en cuenta, para todos los efectos legales pertinentes, los documentos ya aportados en el expediente por la parte demandante y por el demandado en la contestación de la demanda.

Así mismo, solicito que se consideren aquellos documentos mencionados y aportados con la contestación al llamamiento en garantía, aunque no se encuentren anexos en este escrito, siempre que hayan sido debidamente aportados por alguna de las partes y hagan parte del acervo probatorio existente con el fin de garantizar la integralidad del material probatorio y preservar el principio de economía procesal.

Finalmente, en este escrito se anexan únicamente aquellos documentos que no han sido previamente aportados o que resultan pertinentes para fortalecer los argumentos de defensa y las excepciones propuestas.

PRUEBAS DOCUMENTALES:

Solicito al señor Juez, decretar y tener como pruebas de la contestación de la demanda y del llamado en Garantía las siguientes, que pueden ser consultadas en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1J5mnoggBbNGPT3oiUIMla2e0h1oI-oGk?usp=sharing>

1. Contrato de Interventoría 1504 de 2020
2. Contrato de Obra No 1279 de 2020
3. Convenio IDU- 1069 de 2016 Con numeración *N°.4600015905 del 07 de diciembre de 2016.*
4. *Póliza RCE del Contrato de Interventoría.*
5. *Acta de Comité No 74 del 11 de septiembre de 2022*
6. *Comunicaciones MAB:*
 - 6.1 MAB-2-1504-1057-22
 - 6.2 MAB-2-1504-0165-23
 - 6.3 MAB-2-1504-0287-23
 - 6.4 MAB-2-1504-0367-23
 - 6.5 MAB-2-1504-0410-23



- 6.6 MAB-2-1504-0735-23
 - 6.7 MAB-2-1504-0813-23
 - 6.8 MAB-2-1504-0989-23
 - 6.9 MAB-2-1504-1306-23
 - 6.10 MAB-1-1504-0132-24
7. *Resoluciones de declaratoria de incumplimiento y aplicación de la Cláusula Penal.*
- 7.1 RESOLUCIÓN NÚMERO 2320 DE 2024
 - 7.2 RESOLUCIÓN NÚMERO 5482 DE 2023
 - 7.3 RESOLUCIÓN NÚMERO 5017 DE 2023
 - 7.4 RESOLUCIÓN NÚMERO 3949 DE 2023
- 8.-ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1504 de 2020.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

Sírvase H. Magistrado, recepcionar el testimonio técnico de las siguientes personas:

Ingeniero **JUAN CARLOS TOBOS MONTILLA**, quien se desempeñó en el cargo de Director de Interventoría para la fecha de los hechos, con el fin de informar al Despacho sobre las circunstancias y especificaciones técnicas del contrato de obra y de interventoría, así como aspectos de su ejecución (Correo: jtobos@mab.com.co Dirección: Av. El Dorado N 69-76, Torre 3 Ofc 501 Bogotá-Colombia)

Ingeniero **JULIÁN DAVID GONZÁLEZ SÁCHICA**, quien desempeñaba el cargo de Coordinador de Interventoría.
(Correo: jgonzalez@mab.com.co Dirección: Av. El Dorado N 69-76, Torre 3 Ofc 501 Bogotá-Colombia)

Las anteriores personas depondrán sobre los detalles sobre la gestión y supervisión técnica realizada por la interventoría durante la ejecución del contrato, actividades específicas realizadas por la interventoría en el proceso de las reclamaciones realizadas por ETB, cumplimiento del plan de trabajo, cronogramas y especificaciones técnicas por parte de la interventoría y del contratista de obra, así como todo sobre lo que le conste referente a los daños a la infraestructura de la red de ETB.

ANEXOS:

- 1.-Poder Especial que me fuera conferido que incluye CC y TP del apoderado.
2. -Certificado de Existencia y representación de MAB INGENIERIA DE VALOR SA.
- 3.- Los documentales aportados como pruebas.

7. NOTIFICACIONES

Las partes del proceso podrán recibir notificaciones en las direcciones anotadas en la demanda y su contestación.

La sociedad llamada en garantía MAB INGENIERÍA DE VALOR SA con NIT. 900.139.110-5, podrá ser notificada en la Av El Dorado 69 76 Torre 3 Oficina 501 de Bogotá, y en la dirección de correo electrónico propuestas@mab.com.co

El suscrito apoderado podrá recibir notificaciones en la dirección de correo electrónico corporativo calzate@mab.com.co y el correo reportado en el registro nacional de abogados, catherin0017@gmail.com

Atentamente,



CATHERINE ALZATE GALLO
C.C. No 65.633.594 de Ibagué (Tolima)
T.P. No 168474 del C.S. de la J.

